
Un liderazgo responsable (*)

Oscar Arias Sánchez

Ex-presidente de Costa Rica.
Premio Nobel de la Paz de 1987.

Agradezco a los organizadores de este programa por el honor que me han conferido al permitirme compartir, con tan distinguido y talentoso grupo de estudiantes, algunas reflexiones sobre el futuro del mundo y sobre el futuro de la democracia. Felicito a la Universidad de las Américas y a la Texas Christian University por compartir una iniciativa que, sin duda alguna, contribuirá positivamente al desarrollo de los futuros líderes de nuestro continente. Permítanme abordar algunas de las cuestiones que deben preocupar a los futuros dirigentes de nuestro continente.

En las últimas décadas, el continente americano ha emprendido una aventura democrática inédita en su historia. En casi todos los países del hemisferio se ha establecido una legalidad democrática materializada en las elecciones periódicas, el pluralismo y el respeto a las libertades públicas. Impera, en el seno de la comunidad americana de naciones, el consenso de no aceptar la legitimidad de ningún gobierno surgido de una asonada militar o de unas elecciones viciadas por la falta de transparencia. El predicado en que se encuentra en estos momentos el tambaleante régimen del Presidente Fujimori, en Perú, procede en buena medida de la presión de la comunidad internacional que se niega a legitimar un proceso electoral desnaturalizado por la abusiva manipulación gubernamental.

Ello debe ser motivo de optimismo. Sin embargo, todavía debemos preguntarnos cuán profunda y sostenible es la nueva democracia de nuestra región. En América Latina y el Caribe viven en la pobreza más de 250 millones de seres humanos, casi la mitad

de los cuales se encuentran en la miseria extrema: para ellos, el ejercicio del sufragio y la vigencia de las libertades políticas representan poco más que una irónica vaguedad. Excluidos de toda participación en el sistema político, y condenados a una existencia muchas veces corta y violenta, esos millones de pobres, son para los dirigentes, un recordatorio de que los problemas más profundos de nuestra región aún no esperan ser resueltos. Son un recordatorio de que ni la globalización, ni el crecimiento económico, ni siquiera las instituciones democráticas nos proveerán soluciones duraderas si nuestros líderes, actuales y futuros, no optan por un nuevo rumbo ético y por una racionalidad política de la que hasta ahora hemos carecido.

En efecto, se necesita un nuevo rumbo ético. Y es importante que lo repita frente a ustedes, llamados con toda seguridad a ejercer en el futuro diversas formas de liderazgo. Los líderes del siglo XXI deben ser conscientes de que los nuevos retos de la humanidad no podrán ser enfrentados en medio del descuido ético que caracterizó al siglo XX. En mi opinión, de ese descuido se deriva la primera recriminación que debe recaer sobre la dirigencia actual. Los verdaderos problemas de los pueblos y los individuos más pobres del mundo, no solo no han sido resueltos, sino que, además, no han sido correctamente planteados. Mientras esta situación no cambie, el mundo estará muy lejos de la paz, la seguridad y la sostenibilidad.

Es desalentador observar que las democracias más ricas y más poderosas, justamente aquellas a las que con mayor frecuencia recurrimos en busca de

(*) Agradecemos al doctor Oscar Arias Sánchez por permitirnos publicar la presente ponencia, que fuera dada con motivo del "Programa de Liderazgo para las Américas" realizado en la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla, Mexico, entre los días 8 y 14 de octubre del año 2000. Con carácter excepcional, la Comisión de Publicaciones de *Ius et Veritas* consideró pertinente, por su relevancia en el contexto actual, publicar su contenido.

liderazgo, continúan pensando y actuando bajo la obsoleta consigna de la seguridad nacional, en vez de asumir una responsabilidad, propia de esta era de la globalización, en torno al concepto de seguridad humana. La seguridad humana se puede definir de muchas maneras, pero no hay confusión posible cuando se le identifica simplemente señalando dónde es que no existe. El analfabetismo, la pobreza, la desigualdad, la represión, la degradación ambiental y la insalubridad son indicadores bien precisos de la ausencia de seguridad humana.

¿Y cuál es la respuesta de las naciones desarrolladas a estos males? Con desalentadora frecuencia, esa respuesta se reduce a la vieja e irreflexiva decisión de reforzar sus defensas militares, de construir murallas - físicas y jurídicas- contra la inmigración y de proteger los intereses parroquial-nacionalistas cerrando las puertas del libre comercio a las naciones más pobres.

Aquellos de ustedes que proceden de Estados Unidos deben prepararse para, en el ejercicio de su liderazgo, promover medidas que tiendan a derribar las murallas levantadas alrededor de sus mercados y permitir que la producción de los países pobres tenga acceso a ellos y sea pagada a precios justos. De no hacerlo así, no importa cuán sólidas y elevadas sean las murallas que se levantan en sus fronteras nacionales, la desesperada corriente migratoria desde esos mismos países pobres no hará más que crecer. A menos que Estados Unidos, así como sus aliados y sus competidores del mundo industrializado, cesen de vender armamentos a los dictadores y a los genocidas, seguirán viéndose sumergidos por una interminable corriente de refugiados y de personas desplazadas por los conflictos que esos mismos armamentos agudizan. A menos que la ayuda internacional de su país -de hecho extraordinariamente limitada cuando se compara con la de otras naciones desarrolladas- se ejecute de acuerdo con las necesidades de los países pobres y no únicamente de acuerdo con estrechos intereses estratégicos, nunca habrá paz en el mundo.

Volvamos por un minuto al tema del comercio internacional. Obviamente, los países que producen lo que no consumen y consumen lo que no producen, están, por así decirlo, condenados a la práctica intensiva del comercio internacional. La agricultura costarricense produce café, bananos y azúcar, y los habitantes de Costa Rica necesitamos consumir

computadoras, autos y teléfonos celulares. Todos los países pobres y pequeños se encuentran en la misma situación. Naid esperaría que un país de dos, tres o cinco millones de habitantes produjera todo lo que su pueblo necesita. Todos tenemos que depender del comercio. Sin embargo, pese a toda la propaganda y a toda la retórica sobre la libertad de comercio, los países industrializados destinan alrededor de 370 mil millones de dólares al año a subsidiar a sus propios agricultores, con lo cual se alcanza un desastroso resultado: que en los países pobres -a los cuales se les obliga a suprimir los subsidios agrícolas- los agricultores carezcan de acceso competitivo a los mercados internacionales. Los acuerdos de libre comercio, como el TLC o NAFTA, integran tan solo a unos pocos países, y reciben un apoyo tibio y ambiguo de parte de líderes políticos que, sometidos a los temores del público local, no asumen la obligación de explicar a ese público los beneficios del libre comercio.

No sólo se requiere que los países desarrollados abran sus mercados a los países en vías de desarrollo. Las reglas del comercio deben tomar en cuenta los factores humanos. Lo que las naciones pobres necesitan de las naciones ricas es un conjunto de reglas comerciales que estimulen la responsabilidad y la justicia. No se trata de pedir la práctica de la caridad en el ámbito internacional. Si a los países pobres no se les permite exportar sus bienes, exportarán su gente.

Por el lado de los países en vías de desarrollo, es responsabilidad de sus líderes preguntarse cuánta irracionalidad pueden tolerar nuestras democracias. Desde hace mucho tiempo, en este continente se dan las más amplias y profundas brechas entre ricos y pobres. En un país latinoamericano, dos docenas de personas controlan más riqueza que 24 millones de sus compatriotas. En otro, el ingreso del 20% más rico de la población es casi de 40 veces superior al del 20% más pobre, una desproporción inimaginable en el mundo desarrollado.

Semejante disparidad ha hecho de la historia política de gran parte de este hemisferio una prolongada sucesión de ciclos de populismo, violencia política y autoritarismo. Pese al advenimiento de la democracia, nuestros sistemas políticos, con muy pocas excepciones, han sido incapaces de crear algo lejanamente parecido a una fórmula redistributiva que satisfaga el imperativo ético de alcanzar la igualdad de oportunidades entre los seres humanos y, además,

proteger a las colectividades contra los estallidos de violencia generados por la desigualdad y la depauperación. América Latina es la región del mundo en la que menos impuestos se pagan: un 11.2% del producto interno bruto, esto es, una tercera parte de lo que se tributa, como promedio, en los países industrializados. Durante siglos, las élites de nuestros países han preferido vivir en un permanente estado de sitio, asombrosamente costoso desde el punto de vista económico, y catastrófico desde el punto de vista social y político, antes que practicar una solidaridad elemental y una forma racional y moderna de capitalismo que considere a los trabajadores como algo más que mano de obra barata.

Todos quisiéramos estar seguros de que la globalización se convertirá en el talismán que nos dé las respuestas para salir de esa dinámica perversa. Quisiéramos pensar que la revolución tecnológica y los mercados globales obligarán a todos los países a invertir prioritariamente en la población que utilizan métodos de producción y formas de subsistencia propios del siglo XVI arrastrando masas de población que utilizan métodos de producción y formas de subsistencia propios del siglo XVI. Pero, desafortunadamente, la realidad viene a moderar cualquier optimismo. Hasta ahora, la globalización ha confirmado la dolorosa dualidad de nuestras sociedades, escindidas en dos sub-culturas que se separan inexorablemente: una, minoritaria, multiplicando exponencialmente su acceso a la tecnología y al conocimiento; otra, la de la mayoría, condenada a ver alejarse la frontera del conocimiento, resignada a que sus miembros sean peones vitalicios del bienestar ajeno.

En efecto, el discurso dominante nos habla todos los días de un futuro dividido entre ganadores y perdedores de la globalización, con el que se acepta implícitamente lo que antes nos hubiera parecido atroz: que no toda la humanidad se beneficiará de los frutos del progreso económico; que el desarrollo se ha convertido, ahora oficialmente, en un banquete exclusivo para unos elegidos.

Difícilmente saldrá de la globalización, en forma espontánea, la clave que haga posible la integración social de este hemisferio. Hace falta mucho más. Es hora de repensar, seriamente y sin prejuicios, muchas de las creencias políticas y económicas que obstaculizan el desarrollo.

No basta con admitir que los modelos económicos de planificación centralizada fracasaron estrepitosamente en el logro de la eficiencia económica y, aún más, en el logro de la democracia, para ocultar que en la mayor parte de este continente el capitalismo ha sido, también, hasta ahora, un costoso fracaso que ha convertido nuestra ruta al desarrollo en un viaje con más naufragos que navegantes.

Si hemos de repensar nuestro camino al desarrollo debemos ser capaces de percibir matices y desechar dicotomías falsas. La más importante de ellas concierne al papel del Estado y del mercado en la economía. La satanización del Estado por los apologistas del mercado, y del mercado por los partidarios de la intervención estatal, es doblemente ingenua, inútil y peligrosa. Es indiscutible que más de medio siglo de amplia intervención estatal en la economía reportó para una vasta zona de este continente, aunque algunos prefieren olvidarlo, logros importantes de crecimiento y modernización económica. Pero también contribuyó a generar sectores productivos protegidos e ineficientes, aparatos estatales hipertrofiados y, con mucha frecuencia, corruptos, y una proliferación descontrolada de grupos de presión en permanente búsqueda del favor de la burocracia. El peso de la ineficiencia largamente acumulada se manifestó con brutal fuerza en la crisis económica de principios de la década de 1980.

Es necesario, entonces, admitir que es imprescindible rectificar el papel del Estado en nuestros países, que es necesario liberar al sector privado de las ataduras que durante mucho tiempo lo condenaron a la ineficiencia, y que es sano que la iniciativa privada se ocupe de muchas funciones productivas asumidas anteriormente por el Estado. Afirmar esto no tiene que ver con la defensa de ninguna ortodoxia particular. Es simplemente un reconocimiento de la crisis fiscal que aún agobia a la mayoría de nuestros países y de que la economía internacional exige hoy a los sectores productivos niveles de eficiencia y flexibilidad que solamente el mercado puede hacer posible.

Es, sin embargo, irracional y arriesgado confundir la rectificación del papel del Estado con una mutilación indiscriminada de sus capacidades, inclusive de aquellas necesarias para llevar a cabo funciones como la redistribución de la riqueza, el combate a la pobreza, la integración social, la inversión en capital humano y

en infraestructura, que el mercado difícilmente puede realizar. Hemos llegado, pues, al momento de admitir una verdad que nunca debió ser controversial: que las funciones del Estado y del mercado son complementarias y no contrapuestas.

En suma, es irracional y peligroso confundir la reforma del Estado con la destrucción de las funciones que le son propias. Como apunta el gran escritor mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura: “(...) el mercado es un mecanismo eficaz pero, como todos los mecanismos, es ciego: con la misma indiferencia crea la abundancia y la miseria. Dejado a su propio movimiento, amenaza el equilibrio ecológico del planeta, corrompe el aire, envenena el agua, hace desiertos de los bosques y, en fin, daña a muchas especies vivas, entre ellas al hombre mismo. Por último y sobre todo: no es ni puede ser un modelo de vida. No es una ética sino apenas un método para producir y consumir. Ignora la fraternidad, destruye los vínculos sociales, impone la uniformidad en las conciencias y ha hecho del arte y la literatura un comercio. No hay en lo que acabo de decir la menor nostalgia por la estadolatría. El Estado no es creador de riqueza. Muchos nos preguntamos: ¿esta situación no tiene remedio? Y si lo tiene, ¿cuál es? Mentiría si digo que conozco la respuesta. Nadie la conoce. Nuestro siglo termina en una inmensa interrogación, ¿qué podemos hacer? (...) ofrecer nuestro testimonio. Decir con veracidad lo que sentimos y pensamos es ya el comienzo de una respuesta”. (PAZ, Octavio. *Vuelta de los Días*. México, 10 de diciembre de 1996. *Vuelta* 242. p.43).

El dilema que esto nos plantea no es simple. No lo es en las naciones desarrolladas ni, mucho menos, en las naciones más empobrecidas. Cualquiera que sea la fórmula que adoptemos para resolverlos, debemos estar siempre conscientes de la necesidad de enfrentar responsablemente los problemas de la pobreza y la desigualdad o, de lo contrario, prepararnos para el deterioro, por descrédito, de la democracia.

Esa tarea deviene en imperativo ético, pero también es un imperativo político. ¿Cuánta pobreza soporta la democracia? La pregunta no es retórica. El entusiasmo que saludó en nuestra América el ascenso al poder de nuevos regímenes popularmente electos durante la década anterior ha ido desvaneciéndose, con pocas excepciones, de manera continua y generalizada.

Nuestras democracias libran todos los días una pelea decisiva para mantenerse a flote, anegadas por descontrolados niveles de violencia social y apatía que las ponen al borde de la ingobernabilidad.

Los habitantes de este hemisferio hemos descubierto que el fin de la guerra y la subversión no significa, en absoluto, la desaparición de la violencia en nuestras sociedades. La contradicción, más aguda cada día, entre un sistema que aceleradamente crea ansias de consumo en los individuos, mientras niega a la mayoría la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas, ya no se manifiesta por medio de la insurrección armada, sino por medio de la delincuencia. La violencia social, hija de la injusticia, simplemente ha cambiado sus métodos y ha sido reubicada en la prensa escrita: ya no figura en la crónica política, sino que es desplegada en la crónica roja.

El desencanto político de nuestros pueblos tiene tanto que ver con la agudización de la pobreza como con la corrupción y el cinismo de los dirigentes, que subvierten todos los días a la democracia. La corrupción no consiste únicamente en utilizar el poder político para el enriquecimiento personal ilegítimo. La corrupción es mucho más que la colusión entre servidores públicos y empresarios, o entre servidores públicos y delincuentes, para sacar ventajas ilegales o moralmente cuestionables. Hay otras vertientes de la corrupción que no están expuestas a la sanción legal y no siempre, ni en todos los lugares, se someten al escrutinio de la opinión pública.

Hay corrupción en la renuncia de los gobernantes y de los dirigentes políticos a ejercer la función educativa que les corresponde en una democracia. El doble lenguaje, el decir a los gobernados sólo lo que estos quieren oír; el abstenerse, por mero cálculo electoral, de llamar las cosas por su nombre, son prácticas que corrompen y degradan a los individuos, a las sociedades y al sistema democrático.

Es corrupción interpretar que una carrera política es exitosa sólo si siempre se ganan las elecciones, aunque para ello haya que esconder la verdad o reservarla para el momento electoralmente oportuno sin que importen las consecuencias del ocultamiento.

Es corrupto olvidar que la participación en política o en el gobierno exige preparación, desprendimiento, voluntad de servir a los demás y consecuencia entre lo que se predica y lo que se practica, entre la palabra y la acción.

En este continente hemos sufrido cada uno de esos tipos de corrupción. Por ello, no es sorprendente que nuestros sistemas políticos ahora recojan una cosecha de falta de credibilidad. Las clases políticas, con muy pocas excepciones, continúan cavando, con laborioso entusiasmo, la tumba de su propio desprestigio, mintiendo impunemente para alcanzar un poder cada vez más irrelevante, arrastrando principios y doctrinas por los fangos de la más descarada demagogia.

No parece habernos bastado más de siglo y medio de caudillismos militares, incontables golpes de estado y brutales olas represivas para convencernos de que, lejos de ser bastiones de la institucionalidad, los ejércitos de América Latina constituyen una hipoteca permanente sobre el sistema político, un tumor antidemocrático que corrompe el organismo social, una poderosa anomalía institucional que ha obstaculizado el desarrollo democrático de nuestros pueblos.

La lucha por bajar al máximo el gasto militar en los países subdesarrollados y dedicar esos dineros a la inversión social parte, obviamente, de un juicio ético. Pero su origen también reside en la constatación de otra lección histórica, esta sí incontrovertible, sobre la importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos. Mientras las sociedades no estén dispuestas a realizar un esfuerzo masivo de inversión en la educación permanecerán inevitablemente ancladas en el subdesarrollo económico, el autoritarismo político y la desintegración social. Pero, para llevar a cabo la revolución educativa que necesitamos en nuestro continente, se requiere la inversión de ingentes recursos.

Recursos que no estarán disponibles en la medida en que persistamos en el despilfarro que significa dar prioridad al gasto militar.

Existe, hoy, un virtual consenso en afirmar que el nivel educativo es la variable más determinante para predecir la prosperidad económica futura de individuos y naciones. Asimismo, la disparidad de oportunidades educativas es el factor que mayor peso tiene en la generación de desigualdades sociales. De ser así, los latinoamericanos hemos desperdiciado generaciones enteras discutiendo, con desesperante minuciosidad, sobre los méritos y carencias de diversas estrategias de desarrollo, mientras le negamos recursos y esfuerzo al más importante de los caminos hacia el bienestar económico.

Pero también es imprescindible educar para consolidar la democracia, para que los habitantes se

conviertan en ciudadanos, para que desechemos, de una vez por todas, una ficción que venimos arrastrando desde hace dos siglos: la creencia de que es posible fundar repúblicas sin republicanos.

Es necesario educar para que cada ciudadano esté en condiciones de contribuir creativamente al progreso de la sociedad de la cual forma parte. Es necesario educar para evitar que nuestros pueblos sucumban al verbo fácil de demagogos y déspotas, para que conozcan sus derechos y responsabilidades cívicas, reclamando los unos y cumpliendo las otras con plena conciencia de su significado.

Es necesario educar para que cada habitante de nuestras tierras no pierda en las miasmas de la ignorancia la oportunidad de desarrollar su destino único y trascendente, axioma básico que sostiene toda la doctrina de los Derechos Humanos.

El futuro de nuestro continente depende, más que de cualquier otro factor, de que nuestras sociedades entiendan la urgencia de emprender esta cruzada. De que nuestros líderes comprendan que esta tarea requiere de recursos abundantes, cuya obtención, sin ser imposible, sí va a demandar el coraje de tomar decisiones políticas difíciles, como reformar los sistemas tributarios y reducir al mínimo el gasto militar. Ello sólo será posible si nuestros políticos asumen una visión histórica, si son capaces de plantearse el futuro de mucho más allá de las próximas elecciones. Los políticos de América deben entender que, hoy más que nunca, gobernar es educar. “Después del pan, la educación es la primera necesidad de pueblo”, dijo Dantón hace dos siglos.

Hablo ante ustedes con la voz de quien considera que la paz se puede alcanzar a pesar de todos los obstáculos. Hablo ante ustedes como creyente en nuestra capacidad para aprender, para cambiar y progresar, para construir a partir de las ruinas y hacer que en nuestros hogares habite para siempre la sonrisa de los niños.

La calidad de nuestra vida se deteriora conforme nos acostumbramos a la violencia que nos rodea e, incluso, la aceptamos como algo natural. ¿Cómo es posible que en la mañana abramos el periódico, leamos sobre las matanzas de niños en Río de Janeiro, y nos limitemos luego a pasar la página? ¿Cómo podemos, después de ver en la televisión a centenares de niños colombianos víctimas de heridas y quemaduras, buscar otro canal como si nada estuviera ocurriendo?

¿Significa esto que nuestro mundo mecanizado nos ha despojado de la razón, ha endurecido nuestros corazones y nos ha vuelto insensibles incluso ante el sufrimiento de los niños?

Nos encontramos en una encrucijada de la historia. Hemos llegado a un momento en el que la paz es, finalmente, una opción viable. Una era de opresión ha terminado y muchas naciones han declarado su compromiso con la democracia y el desarrollo, y de todo ello emerge una comunidad global que se une en favor del desarrollo humano y la democracia, y en contra de la pobreza y de los vestigios del totalitarismo. Estamos unidos para oponernos a la proliferación nuclear, la deforestación y la indigencia. Pero, si bien hemos ganado una guerra, no hemos ganado aún la paz. Debemos hacer algo más que declarar nuestro compromiso de luchar contra el militarismo, la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Debemos respaldar esas declaraciones con un esfuerzo sincero por el logro de la paz.

Desafortunadamente, el mundo de las potencias económicas y militares está lleno de cinismo e hipocresía. Las discrepancias entre lo que se dice y lo que se hace son cada vez más profundas. Mientras hablamos de la conservación ambiental, provocamos más contaminación, más ruido y más insalubridad.

Ha llegado el momento de dar más importancia a las personas que a las armas, de hacer que nuestra prioridad sea la seguridad humana y no la defensa militar. En contraste con el tradicional concepto de seguridad, ligado a la capacidad militar y al poderío económico, la seguridad humana no se basa en connotaciones nacionalistas o etnocéntricas. En términos cuantitativos, la seguridad humana representa la medida en que los seres humanos se encuentran protegidos contra la ignorancia, la enfermedad, el hambre, el abandono y la persecución.

Es el grado en que son respetadas la vida humana y la dignidad.

Todos somos víctimas de una creencia incorrecta, pero popular, según la cual los individuos se clasifican en dos categorías: aquellos que piensan y aquellos que actúan. Pero la realidad no es tan simple. El intelecto es inútil en ausencia de compromisos con un ideal. El pensamiento y las ideas son infecundos si van acompañados de un alto grado de indiferencia. Como lo ha señalado mi amigo, laureado con el Premio Nobel de la Paz, Elie Wisel, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia.

Pido a ustedes que comprometan el liderazgo que les corresponderá de ahora en adelante haciendo de la seguridad humana su prioridad más universal. Uniéndonos en ese empeño, estaremos definiendo un nuevo comienzo y trabajando juntos alcanzaremos el éxito. El destino humano debe ser cambiado, no por suerte sino por elección. Y esa elección deberá inspirarse en una nueva ética. El mundo del siglo XXI, repito, no podrá ser gobernado con la ética del siglo XX.

La ética que la democracia continental se debe a sí misma integra, desde “el buen gobierno de la ciudad” de Platón, pasando por el “no matarás” de Moisés, por el “amaos los unos a los otros” de Jesús, por el “no respondáis con la violencia” de Ghandi, hasta el “todos somos iguales” de Mandela y de Menchú. Puede encarnar todo eso porque en nuestro continente se han confundido, como en ninguno otro, las razas, las lenguas, las religiones, las virtudes, los defectos, las alegrías y las penas de todo el planeta. Esa nueva ética, construida con valores consagrados en todas las épocas y en todos los lugares del mundo, que puede resumirse en la práctica de la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la vida, a la dignidad y a la libertad humanas, puede ser también la base de una racionalidad solidaria y humana. *AE*